

CAMINANTES

Comunidad Indígena Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor (CASCOMI) | Asociación Shuar Bomboiza | Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) | Corporación Toisán | Comité en Defensa de la Vida y los Derechos de la Naturaleza (parroquias Palo Quemado y las Pampas, Cotopaxi) | Parroquias Chical y Maldonado (Carchi) | Coordinadora Cantonal por la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza (Cantón Pallatanga) | Asamblea Cantonal de Cotacachi | Mancomunidad de la Bioregión del Chocó Andino (Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Mindo) | Frente Provincial por la Defensa de la Pachamama y la Vida (Bolívar) | Federación de Centros Awá del Ecuador y la Gran Familia Awá Binacional | Red de Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte (REDCONE-Esmeraldas) | Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) | Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) | Frente de Defensa del Noroccidente de Pichincha | Asamblea de los Pueblos del Sur (APS) | Observatorio Minero Social y Ambiental del Ecuador (OMASNE) | Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) | Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) | Yasunidos Guapondélig | Minka Urbana | Colectivo de Geografía Crítica Ecuador | Fundación Cambugán | Grupo Kanaka | Acción Ecológica | Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) | Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza (CEDENMA) | Pocho Álvarez | Fred Larreátegui

ARTICULACIÓN NACIONAL CONTRA EL FESTÍN MINERO

PRONUNCIAMIENTO

CAMINANTES -articulación nacional de comunidades y territorios afectados por la minería- y las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia- expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de la noche y madrugada del 8 y 9 de mayo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Desde sus primeras fases, el proyecto minero Río Blanco, cuya ejecución está a cargo de la empresa Ecuagoldmining (establecida por la china Junefield Resources S.A.), generó el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas por la destrucción del páramo, la contaminación de los suelos y el agua que amenazan a la salud y sus vidas.

El Estado no ha garantizado de manera efectiva el ejercicio de los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada, no se han respetado las decisiones comunitarias sobre el destino de su territorio, sus propias prácticas productivas y de vida social, como demanda la Constitución ecuatoriana. En su lugar, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.

Ante el incumplimiento de sus derechos y los oídos sordos a sus demandas, la población ha tomado acciones de hecho directas para exigir la salida de esta empresa. Por tal razón, responsabilizamos al Estado y a la empresa minera por los hechos ocurridos y sus consecuencias.

Todas y todos quienes formamos parte de la articulación CAMINANTES exigimos al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al gobernador del Azuay, Javier Enderica y a todas las autoridades estatales, que detenga la represión y eviten el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores. También demandamos que se garantice la seguridad, integridad y protección de los derechos de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, considerando los estándares nacionales e internacionales. En particular es prioritario el reconocimiento y la aplicación inmediata de las garantías de protección reconocidas en la Constitución ecuatoriana.

Pedimos que se garantice la cobertura de medios, se atienda de forma oportuna a los heridos y se libere a las personas detenidas quienes deben ser reconocidas como defensores de la tierra, el agua y el territorio, en lugar de criminalizarlas.

Recordamos además, que se trata de un proyecto que afectaría el Macizo del Cajas, que fue declarado Reserva de la Biósfera del Ecuador pues es un área rica en biodiversidad y reservorio que provee de agua a cientos de miles de habitantes en el sur del país.

La situación actual requiere medidas firmes contra del *Festín Minero*, y poner freno a las inversiones y actividades mineras, las mismas que, en lugar de traer beneficios para la naturaleza y los pueblos, solo siembran destrucción, miedo y represión.

Respaldamos la demanda de las comunidades de Molleturo que exige que se detengan las actividades del proyecto Río Blanco y se revierta al Estado la concesión a la empresa Ecuagoldminig S.A, y así evitar una escalada de violencia.